

Recurso de nulidad penal Rol I. C. 171-2022.

C/Bastian Felipe Farías Escobar.

Talca, siete de abril de dos mil veintidós.

Visto:

□ En estos autos R.I.T. O-93-2021, R. U. C. 1900027773-0, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó, por sentencia definitiva de veintiuno de enero de dos mil veintidós declaró lo siguiente:

I.- Que se absuelve a Bastian Felipe Farías Escobar de la acusación formulada en su contra y que lo tenía como autor de un delito de robo con intimidación, perpetrado el día 12 de octubre de 2019 en esta ciudad y que afectó al salón de juegos JUGACRI.

II.- Que se **CONDENA** a **BASTIAN FELIPE FARÍAS ESCOBAR**, ya individualizado, a **la pena única de DIEZ AÑOS Y UN DÍA** de presidio mayor en su grado medio, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito de robo con violencia e intimidación y del delito de robo con intimidación, cometidos en esta comuna de Curicó los días 11 de mayo de 2019 y 13 de agosto de 2019, respectivamente.

II.- Que se exime al sentenciado del pago de las costas de la causa por presumírsele pobre.

III.- Que por no reunir los requisitos para ello no se sustituye la condena al sentenciado, por lo que deberá cumplir íntegra y efectivamente la pena impuesta, con el bono que se fijó en la sentencia.

En contra de ese fallo, la Defensa del sentenciado dedujo recurso de nulidad basado en las causales de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal; y, en forma subsidiaria, la de la letra e) del artículo 373 del Código Procesal Penal.

La Excma. Corte Suprema reenvió la primera causal de nulidad de la Defensa sobre la infracción indicada, al motivo de la letra e) del artículo 374 del precitado cuerpo legal.

El 24 de marzo pasado se procedió a la vista de la causa, oportunidad en que se escucharon los alegatos del recurrente y del

XXXXVEZYJ

Ministerio Público, fijándose la audiencia del día de hoy para la lectura de este fallo.

Considerando:

Primero: Que la Defensa del acusado Bastian Felipe Farías Escobar invocó como causales de nulidad, las contempladas en los artículos 374 letra a) del Código Procesal Penal, motivo que fue calificado por la Excma. Corte Suprema a la causal de la letra e) del artículo 374 letra e) del mismo cuerpo legal.

Asimismo, la Defensa del imputado esgrimió como motivo subsidiario de invalidación la misma causal indicada precedentemente, basado en argumentos de diferente orden.

Segundo: Que el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal establece: *“Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados: e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e)...”*

Por su parte, el artículo 342 del mismo Código, en su letra c) señala que: *“Contenido de la sentencia. La sentencia definitiva contendrá: c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”.*

A su turno, el artículo 297 ya citado, consagra la libertad del juzgador en la apreciación de la prueba, estableciendo como límites de ella, los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Asimismo, establece la obligación de valorar la totalidad de la prueba, incluso de aquélla que hubiere desestimado.

Tercero: Que la Defensa, luego de un extenso como innecesario capítulo que intituló “Cuestiones Previas”, referido al desarrollo del juicio oral, las pruebas rendidas y el desarrollo del mismo, señaló como primer fundamento de su recurso, (de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal), que durante la investigación se infringieron sustancialmente derechos y garantías aseguradas por nuestra Constitución Política de la República y los Tratados Internacionales que se encuentran vigentes, a saber, violación del derecho a la presunción de inocencia, la



transgresión del principio de igualdad y no discriminación, del derecho a la igual protección de la ley, derecho al debido proceso y derecho a la libertad personal ambulatoria.

Sostiene que en cuanto al derecho fundamental a la presunción de inocencia, establecido en los artículos 8.1 y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con su artículo 1.1 reconocido en la legislación interna en los artículos 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, Artículo 4 del Código Procesal Penal, en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que transcribe literalmente. Destacando la concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; y el derecho de la Defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. de manera clara transgrede el derecho fundamental a un debido proceso,.

Finalmente, la sentencia recurrida vulnera el derecho fundamental a la libertad personal ambulatoria establecido en los Artículos 7.1, 7.3, 7.5 Y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y garantizado en el Artículo 19 N°7 letras b) y c) de la Constitución Política de La República de Chile, en el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El motivo absoluto de nulidad, en su segunda fuente de fundamentación por la misma causal, lo basa en que la sentencia del Tribunal Oral no satisface los preceptos legales que exige esta causal, infringiendo las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, según explicará en el desarrollo de las causales.

En cuanto a la infracción sustancial de derechos o garantías constitucionales, esto es, Igualdad ante la Ley, Derecho a no ser discriminado y Debido Proceso, se vieron afectadas estas garantías en este proceso se desprende de diversos antecedentes que fueron expuestos en el acápite anterior.

Alega que se vulnera el debido proceso, puesto que la única prueba con la que directamente se atribuye responsabilidad en los delitos a su representado, es un testigo protegido bajo reserva de identidad. Con esa prueba el ente persecutor intentó unir residuos probatorios de su extensa investigación que carecen de sustento suficiente para determinar la



participación de su representado en los delitos por los que fue condenado. El interrogatorio fue extremadamente limitado, extendiéndose incluso por decisión del Tribunal a un funcionario policial, el detective Fuenzalida, quien señaló que no podía contestar una pregunta sobre la motivación que le había comentado la testigo al declarar, porque ponía en riesgo su identidad, siendo totalmente respaldado por el Tribunal sin mayor fundamento, y entregando a criterio del funcionario policial si las respuestas ponían o no en riesgo a la testigo. Con esta y otras limitantes ya descritas anteriormente, se violó evidentemente el derecho de la defensa a 36 interrogar los testigos, consagrado en el artículo 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1. de la misma, y en consecuencia, si se limita la capacidad que tiene la defensa a participar en la elaboración y presentación de la información que el Tribunal tendrá a la vista para juzgar al imputado, se vulnera sensiblemente el debido proceso y con esto la legitimidad de un Estado. Cita el caso “Norín Catrimán y otros vs. Chile”, ante la Corte interamericana de Derechos Humanos, en que se ordenó al Estado de Chile regular la medida procesal de protección de testigos relativa a la reserva de identidad. Si bien, es el legislador quien debiera regular principalmente, en el caso sub lite, la declaración de la testigo protegida es utilizada en grado decisivo para fundar la condena en contra de su defendido, lo que se desprende de la sentencia recurrida y del desarrollo del juicio según ya se indicó en el acápite “Cuestión Previa”.

De igual manera durante la investigación y en la sentencia, también se vulneró el derecho fundamental a la presunción de inocencia, debido a que desde su detención, se ha presumido la participación de mi representado en los delitos por los cuales fue acusado, teniendo al momento de dicha detención como único antecedente en su contra, el testimonio de una testigo protegido, quien señaló en su declaración, ser cercana a esta banda, e incluso amiga de algunos de ellos. Los razonamientos de los sentenciadores alteran con claridad las cargas probatorias, ignorando la presunción de inocencia que favorece a todo imputado, desde que exige al imputado probar su inocencia, o generar éste una duda razonable en ellos, restando incluso todo valor probatorio a la declaración del imputado, y además resta todo valor a la declaración de la testigo presencial Roxana González de la Defensa, conteste en su



declaraciones, sin haber recibido una sola pregunta para desvirtuar su credibilidad. Este error que se vislumbra desde el inicio de sus razonamientos, determina todo lo razonado por las juezas con posterioridad, ya que según puede desprenderse de los audios de la audiencia y del texto de la sentencia, las magistradas dirigen todos sus esfuerzos argumentativos a la desacreditación de la teoría alternativa planteada por la Defensa, olvidando la obligatoria valoración de la prueba rendida por el persecutor.

Finalmente, las sentenciadoras, dan validez determinante al testimonio de la testigo protegido por sobre la declaración conteste del imputado, de la testigo Roxana González, y del coimputado Benjamín Venegas, cuya declaración en video fue exhibida en juicio como prueba nueva.

Afirma que la sentencia viola el Derecho de igualdad ante la ley y no discriminación, y del derecho a la igual protección de la ley, establecido en el artículo 24 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento internacional. Se ha basado en razonamientos de carácter discriminatorio en razón del origen social del condenado. Lo anterior, es abiertamente discriminatorio, por cuanto el condenado señaló dedicarse al comercio ambulante, reconoció haber vivido en más de un sector vulnerable de la ciudad de Curicó y además conocer a varios de los miembros de la banda criminal investigada, incluso a algunos desde la infancia. Situación habitual en las poblaciones y sectores vulnerables de nuestro país. ¿Puede ser un fundamento para vincular al señor Bastian Farías a una banda criminal? ¿Es lógico presumir un vínculo delictual por ser amigo en la red social Facebook de 5 condenados por estos mismos hechos, de entre más de 1000 amigos que el condenado tenía en su red social? ¿Es un indicio suficiente para presumir un vínculo delictual, o la participación de su representado en un delito, el aparecer en una fotografía de redes sociales, en una fiesta electrónica junto a un DJ y a un imputado por esta causa (Benjamín Venegas) a quien señaló conocer desde la infancia?. Teniendo presente el Derecho a la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley y la no discriminación, evidentemente que no, sobre todo teniendo en consideración que la fotografía junto al señor Venegas corresponde a un día, hora y evidente contexto diferente a la perpetración de un delito. El



entender que relacionarse y conocer a estas personas, sería un indicio de coordinación o participación delictual, más aún cuando el acusado reconoció expresamente conocerlos en virtud de su trabajo en el comercio ambulante, de asistencia a fiestas tecno donde concurrían varios de los condenados por esta causa, de tener amigos en común y de vivir en las mismas poblaciones que varios de ellos, no es más que una afirmación que abiertamente discrimina a mi representado por situaciones propias de su origen social, afectando su garantía de igualdad ante la ley y no discriminación. El Ministerio Público, desde tempranas etapas, comenzó a forzar y rebuscar antecedentes que pudieran coincidir con lo declarado por la testigo protegido, lo que no logró sino con la evidente actitud inquisitiva y la presunción de culpabilidad que en todo momento mantuvo el Tribunal. A mayor abundamiento en audiencia de Juicio Oral la Defensa interpuso cautela de garantías, tras la negativa de parte del Ministerio Público de entregar un video con la declaración de un coimputado ante el Fiscal, la que se realizó en presencia de su abogado defensor y con el detective Santibáñez como testigo de dicha diligencia, a lo que éste jamás se refirió durante su declaración en Juicio. El contenido de dicha declaración fue conocido por la defensa durante el desarrollo del Juicio Oral, que accedió a la Cautela de Garantía interpuesta, y a la solicitud de incorporación de dicho video como prueba nueva no ofrecida oportunamente por la Defensa. Sin perjuicio de ello, la Jueza Presidenta de la Sala, a priori, restó valor probatorio a dicho video, que se materializó en la sentencia, puesto que dicho video sólo fue valorado en los aspectos que confirmaban los hechos de la acusación, descartando todas aquellas afirmaciones que contravenían lo declarado por la testigo protegida bajo reserva de identidad, y finalmente no fue considerado por el tribunal a la hora de condenar a su representado.

Como *segundo fundamento de la misma causal anterior, -letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal-*, indica que al analizar la infracción al Derecho a la presunción de inocencia, el Juez ha alterado la carga de la prueba, ignorado la presunción de inocencia que favorece a todo imputado. Por lo anterior, se ha incumplido el estándar de convicción exigido a los sentenciadores en materia penal e ignorado la exigencia de fundamentación, de todo lo cual se deriva que la decisión de condena surge de argumentaciones erróneas e incompletas, que no



permiten conocer cabalmente el proceso intelectual llevado a cabo por el juzgador ni revisar la suficiencia de los elementos de juicio o ponderar la corrección del razonamiento contenido en la sentencia. Asimismo, en la sentencia se infringieron las reglas de la lógica, en especial, el principio de contradicción y el principio de razón suficiente, puesto que el tribunal no tomó en consideración las notorias contradicciones de lo declarado por la testigo protegida, tanto en declaraciones anteriores con las cuales fue enfrentada, como con lo declarado en el propio juicio. Esto principalmente en lo relativo al delito de “Tattersal”, que en su declaración de 24 de febrero dice que el sentenciado entra de los primeros, con la misma ropa, y la misma mochila. Luego, dice en Juicio Oral que no es la misma ropa, pero sí del mismo color, y que no andaba con mochila, para finalmente luego de ser interrogada sobre cómo podía distinguir colores en un video blanco y negro, ella agrega un nuevo elemento al señalar que su representado le habría confesado ser él. Respecto del día y hora en que supuestamente el acusado le habría confesado esto, tampoco es clara. Tampoco se consideró que tanto el acusado como la testigo Roxana González, Aracely de la Fuente, y el coimputado Benjamín Venegas, todos de testimonios de hechos que viven y presencian directamente, son contestes y a la vez, contradicen directamente lo declarado por la testigo protegida, prefiriéndose ante todas las otras declaraciones, el testimonio de oídas de la testigo protegida. ¿Es razón suficiente la prueba rendida por el Ministerio Público determinar la participación de don Bastián Farías en los delitos por los que se le acusa y terminar por condenarlo a la pena de 10 años y 1 día? ¿Es tan ligera la carga probatoria exigida por el tribunal para romper el Principio de presunción de inocencia? ¿Puede una persona perder la libertad en base a pruebas tan vagas? ¿Se presumió la inocencia del imputado en algún momento? La respuesta es no. Evidentemente la testigo protegido miente en juicio, se pregunta ¿será posible perseguir penalmente el falso testimonio prestado por la misma si no juró expresamente en estrado, y si nada sabe la defensa respecto de su identidad? Se suma a lo anterior, la infracción a las máximas de la experiencia, toda vez que las sentenciadoras desconocen las constantes turbulencias del ambiente delictual que son parte de la rutina en sectores vulnerables, confían ciegamente en la declaración de una persona de total



confianza de una banda criminal, cuyas motivaciones para decidirse a declarar no quedan claras. Pero como se preguntó con anterioridad ¿Es habitual que una persona de total confianza de una banda criminal, se acerque a denunciar a sus amigos a raíz de un sentimiento extraño que no sabe explicar? Más allá de las motivaciones de la propia testigo, lo cierto es que el detective Fuenzalida declaró que las reales motivaciones para declarar se las había dado fuera de declaración, y que al señalarlas peligraba la identidad de la testigo.

De lo anterior, queda de manifiesto que la sentencia impugnada de nulidad incurrió en el motivo absoluto de invalidación del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, por cuanto no analizó todos los medios probatorios, sólo da valor a aquellos antecedentes que inculpan a su representado, descartando de plano, e incluso a priori en un caso, la prueba de la defensa que lo exculpa. Según expuso al describir el desarrollo del juicio, estima que hay pasos dentro de la argumentación que no están justificados, las decisiones respecto al valor de determinados medios de prueba no están justificadas y además según se ha señalado ya con anterioridad, las pruebas invocadas no son suficientes para fundamentar los hechos tenidos por probados, existiendo prueba de la Defensa conteste que directamente contraviene lo señalado por la prueba determinante en el caso sub lite, esto es, la declaración de la testigo protegido bajo reserva de identidad.

Señala que los vicios denunciados influyeron sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia. Se vulneraron derechos y garantías fundamentales del imputado y se omitió el razonamiento con una lógica expresión, claro y completo como ha descrito en esa parte, haber señalado las razones legales y doctrinales con estricto apego a las reglas de la sana crítica, que llevan a la convicción del tribunal en la participación de su representado, ha traído a Bastián Farías un agravio que solo es reparable con la nulidad del juicio y la sentencia.

Respecto de la preparación del recurso, sostuvo que este recurso, desde la perspectiva de una infracción planteada en lo principal, donde el núcleo de la garantía afectada fue tan evidente que es posible prescindir de la preparación, como lo ha señalado La Excma. Corte Suprema en el pronunciamiento de la causa Rol de Ingreso de Corte N° 1.314-2008.



En los motivos absolutos no se precisa demostrar perjuicio - porque se le presume cuando se trata de esta clase de infracciones-, pero debe constatarse que se trata de una infracción relevante de los derechos o garantías establecidos en la Constitución y los tratados internacionales y que de conformidad a lo establecido en el artículo 377 del Código Procesal Penal, habida consideración que la mayoría de los vicios por los cuales se recurre tuvo lugar al momento de pronunciarse la sentencia impugnada, no resulta necesario la preparación del recurso interpuesto.

En cuanto a las “peticiones concretas”, solicita:

1.1. Se anule la sentencia y el juicio oral que la precede, solicitando se retrotraigan los autos al estado de realización de un nuevo juicio oral, por una sala del tribunal con jueces que no se encuentren inhabilitados.

1.2. Que se condene en costas al Ministerio Público en caso de oposición.

2. En el evento de ser rechazado el recurso de nulidad interpuesto fundado en la causal principal, solicitó se acoja la causal subsidiaria, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 165, 360 y 386 del Código Procesal Penal, solicitó:

2.1. Se acoja el recurso de nulidad interpuesto, y se anule el juicio y la sentencia.

2.2. Que se condene en costas al Ministerio Público en caso de oposición.

Cuarto: Que en parecer de esta Corte, la sentencia definitiva cuya nulidad se plantea por la Defensa del acusado Farías Escobar, dejó establecido en el considerando quinto los hechos que se tuvieron por acreditados, para en la motivación Séptima, hacer una extensiva descripción de los antecedentes probatorios, efectuó el proceso de valoración de los antecedentes probatorios de cargo incorporados en la audiencia respectiva, procediendo al análisis de todos los elementos y antecedentes recogidos en la investigación, consistente en la testifical de cargo, esto es, en los dichos de las víctimas, de los policías que intervinieron en la etapa de investigación, así como el hallazgo de diversos elementos probatorios, como sus ropas, videos de cámaras de seguridad, que fijaron el trayecto del imputado, y la recepción de las declaraciones que prestó una testigo protegida, lo que permitió construir



analíticamente la vinculación de indicios que en su conjunto, los llevaron a la convicción de condena del acusado, más allá de toda duda razonable. Tal como lo afirma el Tribunal de mérito, -y a diferencia de lo sostenido por la Defensa- no existe un antecedente que sea decisivo para formarse aquella convicción, sino que se ponderaron en su conjunto y que la coherencia interna y externa de los elementos probatorios, los llevaron a condenar al acusado Farías Escobar.

Quinto: Que las alegaciones de la Defensa, en cuanto a haberse infringido los principios de presunción de inocencia, transgresión del principio de igualdad y no discriminación, del derecho a la igual protección de la ley, derecho al debido proceso y derecho a la libertad personal ambulatoria, no guardan relación con los fundamentos de la causal –omisión de los requisitos de la sentencia y en ella, la exposición de los hechos acreditados y análisis de toda la prueba-, cuestión que lleva desestimar este capítulo de invalidación. Huelga decir, además, que las reclamaciones sobre infracciones que se habrían cometido en la etapa de investigación, debieron ser motivo de cuestionamiento ante el respectivo Juez de Garantía a cargo del control de legalidad de aquel estadio procesal, así como la entrega y exhibición de los elementos reunidos en esa etapa, que permite pasar a la siguiente de juzgamiento. En todo caso, el reparo de procedimiento fue debidamente reparado, por medio de la agregación a los antecedentes de prueba nueva, según lo reconoce la Defensa.

Debe precisarse que la tan cuestionada presencia de un testigo protegido en la audiencia de juicio oral, y que habría permitido formar la convicción de condena al Tribunal Oral, está establecida en los artículos 289 y 307 del Código Procesal Penal, y en las normas del artículo 1,17 letra f) y 44 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, por lo que no existen reparos en el ordenamiento jurídico para el uso de esa herramienta de prueba, que en todo caso, debe ser excepcional y que en este caso, aparece razonable en su utilización, conforme a la naturaleza y forma de comisión de los ilícitos por los que se acusó a Farías Escobar, de especial empleo de la violencia.

Cabe consignar que en el proceso dialéctico llevado a cabo por los sentenciadores la prueba no aparece como débil, sino que tuvo la capacidad de provocar la convicción de condena del acusado, y que se



basó en la existencia de un testigo protegido, de las víctimas como testigos presenciales, de las diversas especies o prueba material, así como los registros de las cámaras de seguridad en los dos hechos penales por los que se condenó al acusado, así como del procedimiento policial; prueba de cargo que en su conjunto, fue coherente y concordante entre sí. En consecuencia, para el Tribunal las probanzas incorporadas al juicio oral son de credibilidad suficiente para tener por acreditado el cuerpo del delito y la participación que se imputa al acusado, más allá de toda duda razonable, sin que se observe en la valoración de la prueba afectación al principio de la razón suficiente y de [no] contradicción, ya que los medios de acreditación permitieron la reconstitución de los hechos y la participación del acusado, con el valor suficiente para dar por establecidos aquellos elementos que permiten aplicar la sanción penal. En consecuencia, no existe afectación de los requisitos establecidos en la letra e) del artículo 374, en relación con la letra c) del artículo 342 y del artículo 297, todas normas del Código Procesal Penal, pudiendo reproducirse en la sentencia el razonamiento sobre el debate planteado entre el Ministerio Público y la Defensa, conteniendo la exposición de los hechos y circunstancias que se dieron por probados y de la valoración de los medios de prueba, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 del mismo cuerpo legal.

Por otra parte, el recurrente no desarrolló la forma en que aquella afectación de los principios que invocó, fueron vulnerados en el proceso de valoración de los antecedentes probatorios, ni la forma en que influyeron en lo dispositivo del fallo. No basta sólo su mención, el Recurso debe de derecho estricto, debe tener el desarrollo de ellos, en relación a las probanzas incorporadas en la respectiva audiencia de juicio oral.

Las demás alegaciones de la Defensa, en especial sobre discriminación, no serán atendidas, debido a que no se vislumbran en la sentencia ni tampoco fue objeto de prueba.

Por lo razonado, el recurso en comento será rechazado en este primer fundamento.

Sexto: Que en relación al **segundo grupo de fundamentos de la misma causa de invalidación** que esgrimió la Defensa, la sostiene en que al analizar la presunción de inocencia, se alteró la carga de la prueba,

XXXXVEZYJ

ignorado la presunción de inocencia que favorece al imputado y no se dio cumplimiento al estándar de convicción. La decisión de condena surge de argumentaciones erróneas e incompletas, que no permiten conocer cabalmente el proceso intelectual llevado a cabo por los juzgadores ni revisar la suficiencia de los elementos de juicio o ponderar la corrección del razonamiento de la sentencia. Se infringieron reglas de la lógica y no se consideraron las contradicciones del testigo protegido.

Séptimo: Que la improcedencia de la afectación del principio de inocencia, no guarda relación, en la forma expuesta, con la causal de invalidación referida al proceso dialéctico sobre valoración de los elementos probatorios. Asimismo, no se advierte que los derechos del acusado en este proceso, se hayan afectado de manera alguna, respetándose los principios y reglas procedimentales durante el desarrollo de la audiencia de juicio, como tampoco una imposición arbitraria en la valoración de los elementos de cargo, como de los descargos, que se lee el debido análisis de los antecedentes y desmereciendo la última, por ser contradictoria entre sí, al tenor de los dichos de los testigos.

El intento de la Defensa de desacreditar los dichos del testigo protegido, se basa en elementos secundarios y no trascendentales para valorar ese antecedente, que además tiene corroboración con los demás elementos de cargo que incorporó el Ministerio Público y que permitieron arribar a los señores jueces a la convicción de condena, en los términos del artículo 340 del Código Procesal Penal.

La cita a las máximas de la experiencia sobre “...*las constantes turbulencias del ambiente delictual que son parte de la rutina en sectores vulnerables...*”, no guardan relación con la existencia del ilícito y la participación imputada al acusado de autos, tratándose especulaciones que no tienen cabida en esas materias.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 297, 342 letra c); 374 letra e), 376 y 384 del Código Procesal Penal, ***se rechaza*** el recurso de nulidad deducido por la Defensa de /Bastian Felipe Farías Escobar en contra de la sentencia definitiva de veintiuno de enero de dos mil veintidós, dictada en los autos R.I.T. O-93-2021, R. U. C. 1900027773-0 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó, declarándose que ésta y el juicio oral no son nulos.

Redacción del ministro Carrillo González.



Regístrese y devuélvase.
Rol I. C. 171-2022/PENAL.





XXXXVEZYJ

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Talca integrada por Ministro Carlos Carrillo G., Ministro Suplente Wilfredo Urrutia G. y Abogada Integrante Carolina Araya L. Talca, siete de abril de dos mil veintidós.

En Talca, a siete de abril de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

